



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de  
Protección de Datos

---

### RESOLUCIÓN

---

**Exp.:** 047/2022

**Archivo de las actuaciones con adopción de medidas**

**Fecha entrada:** 28/09/2022

### ANTECEDENTES

**Primero.-** Con fecha 28 de septiembre de 2022 tiene entrada en el Registro general del Consejo General del Poder Judicial una reclamación de AAA referida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de XXX. Los términos de la reclamación formulada son los siguientes:

*"Presenté ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº de XXX, PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE JURA DE CUENTA EN RECLAMACIÓN DE LOS HONORARIOS ADEUDADOS POR UN CLIENTE. Y posterior EJECUCION, (NIG: 000000000) con Auto ejecutivo de embargo contra mi cliente por impago de honorarios.*

*Se interesó la INFORMACION PATRIMONIAL del ejecutado y el Negociado notificó a las partes a través de Lexnet, en vez de la información patrimonial del Ejecutado, la INFORMACION PATRIMONIAL MIA, que soy la abogada ejecutante.*

*ESTE ERROR VULNERA GRAVEMENTE LA LOPD, dándole publicidad a unos datos de carácter personal, protegidos por la LOPD, consideramos que el funcionario debe ser especialmente cauteloso en el tratamiento de los datos, pues se trata de un grave error, que entiendo debe tenerse en consideración, pues se han hecho públicos los datos referentes a mi patrimonio personal.*

*Todo aquel que pueda tener acceso al procedimiento judicial puede consultar los datos de mi patrimonio, por lo que me ha causado unos graves perjuicios que entiendo que deben ser reparados.*

*SOLICITO: Se admita esta reclamación, por responsabilidad patrimonial debido al mal funcionamiento de la Administración de Justicia, por la vulneración de la protección de mis datos personales y patrimoniales, siendo yo la abogada que reclama honorarios, causando unos daños irreparables pues se ha hecho públicos a través de Lexnet, siendo una*



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de  
Protección de Datos

*INFRACCIÓN GRAVE y debo ser indemnizada conforme a la LOPD. Por ser de justicia que pido”.*

La reclamante adjunta diversa documentación del procedimiento de reclamación de honorarios profesionales, incluida la relativa a los resultados de la consulta integral patrimonial que le fue realizada a través de los servicios del Punto Neutro Judicial en fecha 25 de julio de 2022.

**Segundo.-** Mediante comunicación de 6 de octubre de 2022 de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial se acusó recibo a la reclamante, indicándole, respecto de su solicitud por responsabilidad patrimonial debido al mal funcionamiento de la Administración de Justicia, que esta se rige por los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no siendo competente la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos para la tramitación de la misma.

En esa misma fecha se solicitó al órgano judicial información sobre los hechos a que se refiere la reclamación. En fecha 14 de octubre de 2022 tiene entrada en el Registro general del Consejo el informe interesado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.1 de XXX, suscrito por el Magistrado y la Letrada de la Administración de Justicia de dicho órgano judicial, señalándose en el mismo lo siguiente:

*“Tramitación del procedimiento:*

*La demanda de ejecución se presentó el 21/02/19 vía Lexnet, registrándose con el número 154/19, ejecución que dimana de la Jura de Cuentas 9/17 seguida contra D. BBB en reclamación de los honorarios devengados por Dª AAA, en el procedimiento Verbal 521/14.*

*Así iniciado el procedimiento de ejecución de título judicial 154/19, y tras el resultado infructuoso de los embargos trabados, Dª AAA interesó en escrito de fecha 20/07/2022 se procediera a obtener información patrimonial de D. BBB, indicando el DNI del mismo y así se acordó mediante Diligencia de ordenación de fecha 22/07/22, resolución que fue notificada a Dª AAA el día 25/07/22, dándole traslado vía Lexnet de la información patrimonial obtenida del Punto Neutro Judicial.*

*Efectivamente hubo un ERROR INVOLUNTARIO por parte de la funcionaria que tramita el procedimiento a la hora de obtener información patrimonial, puesto que al introducir el DNI en la aplicación del Punto Neutro Judicial, por ERROR introdujo el DNI de la ejecutante en lugar del DNI del ejecutado, pero en ningún caso en el caso que nos ocupa se ha dado*



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de  
Protección de Datos

*publicidad a los datos obtenidos, vulnerando la Ley Orgánica de Protección de Datos por las siguientes razones:*

*En primer lugar, en el procedimiento de ejecución de Título Judicial 154/19, no existían ni existen a día de hoy, más partes personadas que la ejecutante D<sup>a</sup> AAA, y ni siquiera D<sup>a</sup> AAA está representada por Procurador ya que se trata de una ejecución de título judicial dimanante de una Jura de Cuentas, por lo que nadie ha podido tener acceso a la información patrimonial.*

*En segundo lugar, la Diligencia de Ordenación acordando la averiguación de la información patrimonial del ejecutado, junto con el traslado de dicha información, en este caso la de la propia ejecutante al haberse producido un ERROR INVOLUNTARIO, se notificó únicamente a D<sup>a</sup> AAA, a través de Lexnet, una aplicación que garantiza la autenticidad y el secreto de las comunicaciones, y a la que sólo puede acceder D<sup>a</sup> AAA a través de un certificado digital personal, por tanto sólo ella pudo tener acceso a dicha información, que efectivamente, POR ERROR, era la suya propia.*

*En tercer lugar, en cuanto D<sup>a</sup> AAA puso en conocimiento de este Juzgado lo ocurrido, la Letrada de la Administración de Justicia puso el hecho en conocimiento del CAU, e inmediatamente se procedió al borrado de los datos del sistema de gestión procesal GGG.*

*Conclusión: Efectivamente, a pesar de que por parte de la oficina judicial en su gestión de los diferentes procedimiento que se tramitan en la misma, se hace con escrupuloso cumplimiento en cuanto al tratamiento de los datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en la LOPD, en el caso que nos ocupa, la Ejecución de Título Judicial 154/19, se produjo un ERROR INVOLUNTARIO, entre otras causas, y ello sin que sirva de justificación al sigilo y cautela que debe llevarse en la tramitación de los datos de carácter personal, por las constantes interrupciones que sufre la oficina judicial en las horas de audiencia, en cuanto a la obtención de la información patrimonial de ejecutante, pero dicho ERROR no le ha podido producir ninguna vulneración de la protección de sus datos personales y patrimoniales ni causarle ningún perjuicio, por las razones expuestas anteriormente."*

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**Primero.-** Los tratamientos de datos personales que se realizan en el curso de los procedimientos judiciales se rigen por la normativa de protección de datos. Así se desprende inequívocamente de los preceptos que se señalan a continuación: i) artículo 2, apartado 4, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: "[e]l tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de  
Protección de Datos

*tramitación por los órganos judiciales de los procesos de que sean competentes, así como el realizado dentro de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables”; y ii) artículo 236 ter, apartado 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales: “[e]l tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo y en las leyes procesales”. Igualmente da nueva redacción la referida Ley Orgánica 7/2021 al artículo 236 octies de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo apartado primero establece las funciones que corresponden al Consejo General del Poder Judicial respecto a las operaciones de tratamiento efectuadas con fines jurisdiccionales por los Juzgados y Tribunales y las Oficinas judiciales, entre las que se encuentran la supervisión del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales mediante el ejercicio de la labor inspectora (letra a) y la tramitación de las reclamaciones interpuestas por los interesados, informándose al reclamante sobre el curso y resultado de la reclamación en un plazo razonable, previa realización de la investigación oportuna si se considera necesario (letra e).*

**Segundo.-** La competencia del Consejo General del Poder Judicial en materia de protección de datos personales se ejerce, por tanto, respecto de los tratamientos de datos personales efectuados con fines jurisdiccionales, cuya caracterización se recoge en el apartado primero del artículo 236 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a cuyo tenor “[t]endrá fines jurisdiccionales el tratamiento de los datos que se encuentren incorporados a los procesos que tengan por finalidad el ejercicio de la actividad jurisdiccional”.

Con arreglo a lo previsto en el apartado 1 del artículo 236 nonies LOPJ, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2021, las competencias que de acuerdo con lo establecido en el artículo 236 octies corresponden a la autoridad de protección de datos personales con fines jurisdiccionales serán ejercidas, respecto del tratamiento de los datos realizados por Juzgados y



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de  
Protección de Datos

Tribunales, por la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial.

**Tercero.-** En el presente caso, los hechos denunciados se refieren a la posible difusión indebida de datos personales de la reclamante con ocasión de la práctica de determinadas actuaciones procesales realizadas en el curso de un procedimiento judicial de reclamación de honorarios profesionales instado por la reclamante. Se dan, por tanto, los elementos caracterizadores de los tratamientos de datos con fines jurisdiccionales, siendo competente para su conocimiento el Consejo General del Poder Judicial.

**Cuarto.-** Con arreglo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuya entrada en vigor se produjo el día 7 de diciembre, día siguiente al de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado', la Agencia Española de Protección de Datos *"inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos de carácter personal, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción"*.

En el marco de las funciones que el Consejo General del Poder Judicial tiene asignadas como autoridad de control en materia de protección de datos de carácter personal, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales, le corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad a trámite de la reclamación formulada. En este sentido, no concurriendo ninguna de las causas de inadmisión establecidas en el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el marco de las actuaciones previas de investigación a que se refiere el artículo 67 de la misma, se ha recabado información al órgano judicial contra el que va dirigida la reclamación sobre la posible vulneración de la normativa de protección de datos personales.

**Quinto.-** Como consideración previa, es preciso referirse a la solicitud contenida en el escrito de formulación de la reclamación de que "se admita esta reclamación, por responsabilidad patrimonial debido al mal funcionamiento de la Administración de Justicia, por la vulneración de mis datos personales y patrimoniales, siendo yo la abogada que reclama honorarios, causando unos daños irreparables pues se ha hecho públicos a través de Lexnet, siendo una INFRACCIÓN GRAVE y debo ser indemnizada conforme a la LOPD".



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de  
Protección de Datos

Al respecto debe señalarse, en primer término, que la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por lo dispuesto en los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, careciendo de competencias en este ámbito la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial.

Por lo demás, el artículo 82 del Reglamento general de protección de datos, bajo la rúbrica de "derecho a indemnización y responsabilidad", establece en su apartado 1 que *"[t]oda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del presente Reglamento tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos"*. No obstante, este mismo precepto, en su apartado 6, contempla la vía judicial como la adecuada para formalizar cualquier pretensión indemnizatoria por esta causa, al establecer que *"[l]as acciones judiciales en ejercicio del derecho a indemnización se presentarán ante los tribunales competentes con arreglo al Derecho del Estado miembro que se indica en el artículo 79, apartado 2"*. Es patente, por tanto, la falta de competencia del Consejo General del Poder Judicial para conocer de tal pretensión indemnizatoria.

**Sexto.-** Los tratamientos de datos que se realizan en el curso de los procedimientos judiciales se rigen por la normativa de protección de datos. Así se desprende de los preceptos transcritos en el fundamento jurídico primero. Estos preceptos disponen, por otra parte, que, junto a la normativa general de protección de datos personales, los tratamientos de datos que tienen lugar en la tramitación de los procesos se rigen asimismo por las leyes procesales y la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual establece en su Capítulo I bis del Título III del Libro III (artículos 236 bis a 236 decies) determinadas particularidades en esta materia. La posibilidad de que estos tratamientos se rijan por previsiones específicas está contemplada en el propio Reglamento general de protección de datos, cuyo Considerando (20) reza como sigue: *"Aunque el presente Reglamento se aplica, entre otras, a las actividades de los tribunales y otras autoridades judiciales, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros pueden especificarse las operaciones de tratamiento y los procedimientos de tratamiento en relación con el tratamiento de datos personales por los tribunales y otras autoridades judiciales. A fin de preservar la independencia del poder judicial en el desempeño de sus funciones, incluida la toma de decisiones, la competencia de las autoridades de control no debe abarcar el tratamiento de datos personales cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial. El*





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Dirección de Supervisión y Control de  
Protección de Datos

*control de esas operaciones de tratamiento de datos ha de poder encomendarse a organismos específicos establecidos dentro del sistema judicial del Estado miembro, los cuales deben, en particular, garantizar el cumplimiento de las normas del presente Reglamento, concienciar más a los miembros del poder judicial acerca de sus obligaciones en virtud de este y atender las reclamaciones en relación con tales operaciones de tratamiento de datos”.*

Del referido contexto normativo se desprende que corresponde al Consejo General del Poder Judicial, como autoridad de protección de datos en los tratamientos realizados con fines jurisdiccionales, garantizar el cumplimiento de las normas del Reglamento general de protección de datos en lo que se refiere a dichos tratamientos. Entre dichas normas se encuentran, desde luego, las relativas a la necesaria atención de los principios por los que deben regirse los tratamientos de datos personales, entre ellos el de “integridad y confidencialidad” contemplado en la letra f) del artículo 5 del Reglamento.

En las actuaciones practicadas en este expediente se ha constatado que se ha producido una actuación procesal que habría comprometido el referido principio de confidencialidad de los datos personales de la reclamante, al haberse ordenado y practicado una consulta patrimonial respecto de una persona que no procedía, realizándose esta respecto de la Abogada -ahora reclamante- que había instado el procedimiento y esta concreta actuación procesal respecto de la persona del ejecutado, esto es, el cliente de la Abogada cuyos honorarios se reclamaban en el proceso de jura de cuentas y posterior ejecución del mismo. Ello se produjo, según se señala en el informe del órgano judicial, debido a un error, al haber introducido la funcionaria actuante el DNI de la ejecutante -y no el del ejecutado, como hubiera procedido- en la aplicación el Punto Neutro Judicial mediante la que tuvo lugar la averiguación patrimonial.

En cuanto a la incidencia respecto de los datos personales de la reclamante del error producido con la actuación procesal inadecuada, esta se limitó al ámbito de la propia oficina judicial, toda vez que, según el informe emitido por el juzgado, la diligencia de ordenación por la que se acordó la averiguación patrimonial y los resultados de la misma únicamente fueron puestos en conocimiento de la propia reclamante, procediéndose al “borrado de los datos del sistema de gestión procesal GGG” en cuanto la reclamante puso lo ocurrido en conocimiento del juzgado.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Dirección de Supervisión y Control de  
Protección de Datos

Descartada, por tanto, una difusión indebida de los datos personales de la reclamante más allá, según se ha indicado, del ámbito del propio órgano judicial, se señalan a continuación las medidas a adoptar para evitar la reiteración de actuaciones como las que constituyen el objeto de la presente reclamación.

**Séptimo.-** Entre las funciones que le corresponden respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales, la letra b) del apartado 1 del artículo 238 octies LOPJ asigna al Consejo General del Poder Judicial la de promover la sensibilización de los profesionales de la Administración de Justicia y su comprensión de los riesgos, normas, garantías, derechos y obligaciones en relación con el tratamiento. Por otra parte, en este contexto de garantizar la aplicación de la normativa de protección de datos cabría situar asimismo las medidas que corresponde adoptar a las autoridades de control en las resoluciones de los procedimientos sancionadores a que se refiere el artículo 77, apartado 2, de la Ley Orgánica 3/2018, para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese podido haber cometido.

En anteriores resoluciones adoptadas en esta materia el Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que, aun siendo consciente de la carga de trabajo que los órganos judiciales soportan y de las dificultades que ello supone en múltiples ocasiones para la práctica de diligencias y actuaciones de las oficinas judiciales, en especial en circunstancias como las que afectan al presente caso, puestas de manifiesto en el informe del órgano judicial, en el marco de la función que tiene atribuida para el señalamiento de las medidas que deben ser adoptadas para evitar situaciones como la que se ha puesto de manifiesto en este expediente, consideraba preciso enfatizar la necesidad de que se implanten en el órgano judicial técnicas organizativas que supongan la realización efectiva de las comprobaciones previas que sean en cada caso adecuadas, contribuyendo así a que no se vean afectados los derechos y principios de la normativa de protección de datos personales en los tratamientos que de ellos se realizan en las actuaciones procesales.

En el informe del órgano judicial se hace referencia a la ausencia de difusión de los datos de la reclamante obrantes en la averiguación patrimonial practicada y a las medidas inmediatamente tomadas a raíz de tener conocimiento de la incidencia producida (el "borrado" de los datos en el sistema de gestión procesal). No obstante, en la línea antes señalada, tales medidas deben complementarse con aquellas otras que refuercen la garantía





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Dirección de Supervisión y Control de  
Protección de Datos

de una atención escrupulosa en las actuaciones procesales de los principios que rigen los tratamientos de datos personales, incluido el de confidencialidad de tales tratamientos. A tal fin puede señalarse que el diseño de un esquema de las comprobaciones previas antes indicadas, así como el chequeo de su realización efectiva, constituyen instrumentos que debieran garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden en este ámbito a los responsables del tratamiento.

**Octavo.-** Habiendo quedado delimitados los hechos denunciados en la reclamación presentada y en el informe del órgano judicial, no procede llevar a cabo ulteriores actuaciones de investigación en relación con los mismos. Tomando en consideración las medidas ya adoptadas y aquellas otras que se señalan en el anterior fundamento jurídico, procede decretar el archivo del expediente.

Por lo expuesto,

### **ACUERDO**

**1.-** Archivar las actuaciones previas practicadas a raíz de la reclamación formulada por AAA frente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de XXX, registrada con el número de expediente 047/2022, con la adopción de las medidas señaladas en el fundamento jurídico séptimo.

**2.-** Notificar la presente resolución a AAA y al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de XXX.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 del referido texto legal.



**CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Dirección de Supervisión y Control de  
Protección de Datos

Firmado digitalmente  
José Luis Gisbert Iñesta  
Director de Supervisión y Control de  
Protección de Datos (e.f.)